

C. A. de Santiago

Santiago, a trece de mayo de dos mil veinticinco.

**VISTO Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, comparece el abogado Javier Iván Lermenda Reyes en representación del Instituto Nacional de Deportes de Chile (en adelante, “IND”), quien deduce reclamo de ilegalidad en contra de la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) en la causa Rol N° C 1840-24, que acogió el amparo deducido por don Guillermo Mora Sanzana, ordenando la entrega de la rendición de cuentas del Proyecto N°2100042637, identificado como “ACTIVIDADES ALTO RENDIMIENTO: SKI, BALONMANO, PATÍN CARRERA, CICLISMO Y VOLEIBOL PLAYA”, correspondiente a los recursos entregados a la Corporación ADO Chile, por un monto total de \$107.740.685, y que el IND se negó a entregar por considerar que dicha información se encontraba aún en proceso de fiscalización, sin haber sido concluida ni validada de acuerdo con los procedimientos internos del Instituto, por lo que la divulgación anticipada de dicha información podría afectar gravemente el proceso administrativo en curso, entorpeciendo su capacidad para cumplir adecuadamente con las funciones de fiscalización y supervisión que le otorga la ley.

El amparo fue acogido por el CPLT el 24 de junio de 2024, mediante la decisión Rol N° C 1840-24, en la que se ordenó la entrega de la rendición de cuentas solicitada, fundándose en el hecho de que la rendición de cuentas es un documento público, accesible en virtud de la Ley N°20.285 (LT), y que su divulgación no afectaría el desarrollo de las funciones del IND, dado que se trataba de información ya existente en los registros del Instituto.

Al efecto, y alegando la causal del artículo 21, N°1, letra b) de la LT, afirma que la entrega de la información solicitada, consistente en documentación presentada y pendiente de revisión, afecta el debido cumplimiento de las funciones del IND, ya que interfiere y reduce considerablemente el espacio de deliberación que tiene la Institución en relación al procedimiento administrativo de Rendición de Cuentas que se encuentra desarrollando, pudiendo quedar evidentemente expuesta a recibir presiones o intervenciones de terceros ajenos al proceso, al momento de adoptar su decisión.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MRYXXUUPFWM

Más aún, sostiene que, a la fecha, existen en el IND cerca de mil proyectos con documentación ingresada y en estado de revisión, en espera de cursar el proceso ya descrito, conforme el orden consecutivo establecido y planificado por la Unidad especializada responsable, de manera que, el sólo hecho de adelantar la necesaria revisión previa de la documentación en cuestión, resultaría en un trato discriminatorio y una afectación de la justicia y racionalidad del proceso, respecto de aquellas organizaciones que mantienen rendiciones en la misma etapa de revisión y sobre las cuales no se han ejercido derechos establecidos en la ley N° 20.285.

Por su parte, y realizando el test de daño, que de acuerdo a la definición del CPLT a partir de la decisión del Amparo A45-09, se define como el *“balance entre el interés de retener la información y el interés de divulgarla para determinar si el beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor que el daño que podría causar su revelación”*, sostiene que en el caso de autos resulta evidente que la divulgación de la información redundaría en un daño mayor para la ciudadanía que su resguardo, por cuanto al tratarse de antecedentes requeridos para la adopción de una resolución que aún no se realiza, su publicidad no hace sino aumentar el riesgo de confusión entre los ciudadanos, por cuanto permitiría a éstos formarse un juicio anticipado e incluso erróneo respecto una decisión que necesariamente requiere la ponderación de un conjunto de antecedentes y no de una parcialidad de ellos, lo que redundaría en establecer a priori, una determinación que posteriormente puede ser distinta a la que se adopte finalmente, lo que trastoca el potencial control social que al efecto se pudiera realizar.

Afirma así, que si bien la documentación que se encuentre en estado “por revisar”, no convierte en reservada la información solicitada, su entrega anticipada afecta el funcionamiento del órgano por cuanto obliga a adelantar un proceso de revisión que no estaba contemplado dentro de su planificación y obliga a hacer públicos antecedentes previos a la adopción de una resolución, lo cual puede inducir a confusión respecto de los mismos, sin perjuicio que algunos o todos adquieran calidad de públicos, una vez que sea adoptada la decisión de tener por aprobada la documentación presentada.

Por lo expuesto, considera que la decisión del Consejo al acoger el amparo ha extralimitado el ámbito de aplicación del derecho de acceso a la



información pública, al disponer la entrega anticipada de antecedentes que forman parte de un proceso administrativo de fiscalización sobre el uso de recursos públicos, aun no afinado, y cuya revelación anticipada trastoca gravemente el propio interés público que hay detrás del establecimiento de dicho procedimiento.

**SEGUNDO:** Que, comparece el abogado David Ibaceta Medina, Director General y Representante del Consejo para la Transparencia, quien evacúa informe respecto del recurso incoado, solicitando su total rechazo.

Señala, en primer lugar, que la circunstancia alegada por el IND de encontrarse las rendiciones consultadas en proceso de análisis o validación no puede constituir un motivo plausible para denegar lo solicitado, por cuanto tal restricción, por su sola concurrencia, no convierte en reservada la información que se ha pedido. En este sentido, si la información solicitada se encuentra en proceso de validación, procedería que este órgano, al momento de hacer entrega de esta y si lo estima necesario o conveniente, advierta al requirente de la falta de validez o de su carácter no oficial, tal como esta ltima. Corte lo ha ratificado en otros casos, sin que ello sea un impedimento para proporcionarla.

En este orden de ideas, afirma que el derecho de acceso a la información pública consagrado en la Ley de Transparencia se extiende, en un sentido general, tanto a la documentación oficial o validada como a la no oficial que obre en poder de la Administración del Estado en el ejercicio de sus funciones públicas, toda vez que dicho cuerpo legal no la limita a la puramente oficial, validada o analizada, no contemplando, por ende, dicha diferenciación.

Sostiene que la fórmula de publicidad que contempla el artículo 5° de la LT así lo confirma, pues, en su inciso primero, declara de carácter público los actos administrativos, sus fundamentos y procedimientos, todos antecedentes que lógicamente detentan un carácter público al vincularse directamente con una decisión de una autoridad. Pero, asimismo, el legislador, en el inciso segundo -norma omitida u olvidada por el IND en su alegación-, establece expresamente también como públicos la *“información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento (...).”* Tanto es así que el



legislador establece una presunción legal de publicidad amplia, que desde luego abarca la información ordenada entregar por este Consejo, al establecer el Principio de Apertura o Transparencia, en el artículo 11 letra c), de la LT, conforme al cual *“toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”*, de lo que se concluye que la regla general es la publicidad y el secreto o reserva de carácter excepcional, debiendo aplicarse solamente en aquellos casos en que sea estrictamente indispensable y justificado, atendido que su reconocimiento afectará la garantía constitucional de publicidad consagrada en la Carta Fundamental.

En el caso en examen, afirma que la información controvertida se refiere a la rendición de cuentas de recursos fiscales que han sido entregados con ocasión del Proyecto Deportivo Código N°2100042637, de la Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento “ADO CHILE” y financiado con Recursos del Programa 01 del Instituto Nacional de Deportes, por lo que respecto de la información solicitada se configuran cabalmente los presupuestos contemplados en los artículos 5°, 10° y 11 de la LT, que permiten concluir que se trata de información susceptible de ser objeto de derecho de acceso a la información y de ser entregada al solicitante, pues detenta una naturaleza eminentemente pública, salvo que concurra a su respecto alguna causal de secreto o reserva legal, las que, por constituir una excepción al principio general de publicidad, deben interpretarse y aplicarse en forma restrictiva, y desde luego, ser acreditada fehacientemente por quien las invoca, lo cual, en el caso de autos, no ocurrió.

Al respecto, sostiene que si bien el reclamante alega que, de entregarse la información pedida, se podrían producir una afectación a su privilegio deliberativo en los términos del artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia, el IND se encuentra imposibilitado de reclamar de ilegalidad sobre la base de la referida causal de reserva, conforme a la prohibición expresa establecida en el art. 28 inciso 2° de la Ley de Transparencia, cuyo tenor es claro al sostener que no le asiste la facultad de interponer un reclamo de ilegalidad al órgano de la Administración por la causal de secreto o reserva de información contenida en el art. 21 N°1 de la Ley de Transparencia.



En consecuencia, solicita que el reclamo de ilegalidad del IND sea rechazado en esta parte, por cuanto incurre en una abierta infracción de ley, al desconocer el texto del inciso 2° del Art. 28 de la LT, que expresamente prohíbe a los órganos de la Administración del Estado reclamar de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, de la resolución del Consejo para la Transparencia que otorgó acceso a la información que dicha institución denegó, cuando la denegación se hubiere fundado en la causal del N° 1 del Art. 21 de la LT, lo que convierte en improcedente la reclamación en virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del Art. 28 de la LT.

Señala que el impedimento para que las Cortes de Apelaciones puedan conocer y pronunciarse sobre la causal del artículo 21 N°1 de la LT, ha sido expresamente reconocido por la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago en diversas sentencias que cita, por lo cual y conforme al claro tenor del artículo 28 inciso 2° de la LT y a la jurisprudencia este Tribunal, considera que esta Corte debería desestimar entrar a conocer toda argumentación referida ya sea directa o indirectamente a la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1 de la LT, y cualquier alegación formulada en la línea de la afectación de funciones del órgano, por carecer de legitimación activa el órgano reclamante, para invocar tal causal de reserva en sede judicial.

En subsidio de lo anterior, y para el evento que esta Corte decidiera igualmente entrar a ponderar la concurrencia de la causal de reserva invocada por el órgano, hace presente que, para efectos de ponderar la falta de concurrencia de los requisitos de la causal de reserva invocada, se debe tomar en consideración en primer término, el marco normativo aplicable.

En este contexto, la causal de reserva invocada por el IND se encuentra consagrada en el Art. 21 N°1, letra b), de la LT, en los siguientes términos:

*“Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:*

*1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: (...)*

*b) tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados”.*

Estos supuestos de afectación de funciones son los que han sido invocados por el órgano reclamante de ilegalidad, los cuales se encuentran



expresamente definidos en el Art. 7º, N° 1, del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por “*antecedentes*” todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por “*deliberaciones*”, las consideraciones formuladas para la adopción de estas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios.

Sobre el particular, sostiene que a partir de las decisiones de los amparos roles C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras, el Consejo ha sostenido reiteradamente que, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos:

a) Que lo solicitado esté constituido por antecedentes o deliberaciones previas que la autoridad respectiva tenga en cuenta para adoptar una determinada decisión, medida o política.

i. Que el proceso deliberativo sea realmente tal, es decir, que se trate efectivamente de un proceso que se encuentra pendiente de decisión por parte de la autoridad que invoca la causal en examen; y,

ii. Que exista certidumbre en la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial. Esto no apunta a conocer el momento preciso en que se tomará la decisión, sino que a la existencia de una causalidad clara entre los antecedentes que se quiere reservar y la adopción de una decisión sobre la base de aquéllos, de manera que ésta última se vaya a producir y no sea solamente una posibilidad cuya probabilidad de concreción sea incierta; y,

b) Que la publicidad, conocimiento o divulgación de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido

Respecto a la concurrencia de los presupuestos mencionados, en el considerando 5) de la decisión, se precisó que “*la Institución no acompañó suficientes antecedentes, medios de prueba o elementos de juicio que permitan a este Consejo, tener por configurada la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21º N°1, letra b), de la Ley de Transparencia, o estimar plausible que por el hecho de entregar la documentación aportada por un beneficiario o cuentadante para la rendición de cuentas de un proyecto ejecutado con recursos públicos se afectaría su privilegio deliberativo sobre la materia, en específico, el procedimiento administrativo de fiscalización respectivo. Al efecto, el organismo no explicó el modo en que la entrega de la*



*información consultada produciría una afectación presente o probable con suficiente especificidad en el cumplimiento de las funciones del organismo, no bastando para ello enunciar -de modo sucinto y tácito- la causal de excepción esgrimida, hacer menciones generales, hipotéticas y meras apreciaciones subjetivas, omisiones que impiden tener por configurada la causal de secreto o reserva que fuere esgrimida”.*

En efecto, según se lee en los descargos presentados por el IND en el procedimiento administrativo, el órgano sólo se limitó a describir el procedimiento de rendición de cuenta sin explicar de manera pormenorizada cómo se afectaría concretamente el debido cumplimiento de sus funciones con la entrega de la información.

Por esta razón el Consejo en el considerando 6), 7) y 8) de la decisión en comento, precisó que, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entrega, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. Lo anterior, teniendo presente, además que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva. Por lo demás, dichas alegaciones han sido reiteradamente desestimadas con ocasión de los Amparos Roles C12733-22, C6592-23, C6599-23 y C7598-23, de información de similar tenor y entre las mismas partes.

En ese mismo orden de ideas, hace presente que la importancia de la rendición de cuentas en casos similares ha sido ya relevada reiteradamente por el Consejo, por ejemplo, en las decisiones de los amparos Roles C633-11, C5174-21 y C3237-22, entre otras, advirtiendo que estas contribuyen a transparentar y ejercer control sobre la utilización de los recursos públicos que han sido asignados, evitando con ello su destinación a fines diversos a aquellos para los cuales han sido otorgados, así como permiten rendir cuenta del correcto ejercicio de las funciones públicas del Servicio y de una gestión eficiente de los recursos públicos, conforme los principios de eficiencia y eficacia. Asimismo, su publicidad permite relevar el estado de pendiente en el proceso de rendición de cuentas de un beneficiario que se adjudicó recursos públicos por parte del órgano reclamado, todo lo que refuerza el ejercicio de



sus funciones en esta materia, por lo que no es posible tener por configurada la causal de reserva alegada en el presente caso.

Por lo expuesto, sostiene que la Decisión de Amparo Rol C1840-24 emitida por el Consejo para la Transparencia se encuentra ajustada a derecho, habiéndose dictado dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le encomendó el legislador, e interpretando la normativa conforme al artículo 8° de la Constitución y la Ley de Transparencia, no configurándose las ilegalidades alegadas por la reclamante, por lo que solicita el rechazo del reclamo de ilegalidad en todas sus partes.

**TERCERO:** Que, como cuestión previa a resolver el asunto sometido a la decisión de esta Corte, y tal como lo ha venido estableciendo la jurisprudencia, cabe señalar que, a partir de lo establecido en los artículos 6°, 7° y 8° de la Constitución Política de la República, la Ley N°20.285 de 2008, Sobre Acceso a la Información Pública, creó una nueva institucionalidad con miras a promover y garantizar la transparencia y la probidad, razón por la cual, la regla general es la publicidad y acceso a la información pública, como una manifestación de la libertad de información reconocida en el artículo 19, N°12 de la Constitución, siendo la excepción las causales de reserva del artículo 21 de la citada ley u otras que establezca una ley de quórum calificado, las que deben entenderse como un desarrollo o aplicación de lo dispuesto en el artículo 8° de nuestra Carta Fundamental.

Al efecto, cabe recordar que conforme al inciso primero del señalado artículo 8° de la Constitución “(...) *el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones*”. Por su parte, el inciso 2 de la misma norma establece que “(...) *son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quorum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional*”.

De esta manera, y como se ha sostenido por esta Corte, es a la luz de lo dispuesto en esta norma constitucional “(...) *como ha de interpretarse la normativa de acceso a la información pública, pues ella constituye una condición determinante para un Estado Democrático, pues permite visibilizar*



*la actuación pública, fomenta la participación ciudadana, permite ejercer un control social, favorece la probidad, e incentiva la eficiencia y eficacia en el actuar administrativo, entre otros de sus fines. Se establece entonces, la publicidad como regla general, con la excepción de que exista una ley de quorum calificado que la restrinja, cuando pueda verse afectado el cumplimiento de las funciones de los órganos estatales, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional” (Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Contencioso Administrativo-194-2021).*

Siguiendo este mandato constitucional, el artículo 5° de la Ley 20.285 establece que *“En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quorum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación, procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”.*

Enseguida, el artículo 21, N°1, letra b) de la misma ley, consagra como causal de secreto o reserva para denegar total o parcialmente el acceso a la información *“Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: (...) b) tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados”.*

Por su parte, el artículo 28 de la LT establece expresamente que *“En contra de la resolución del Consejo que deniegue el acceso a la información, procederá el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante.*

*Los órganos de la Administración del Estado no tendrán derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información que hubieren denegado, cuando la denegación se hubiere fundado en la causal del número 1 del artículo 21”.*



Finalmente, y tomando como punto de partida el mandato constitucional y principios señalados, la Ley N°20.285, a partir de su Título IV, regula detalladamente el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado, el que debe ser ejercido en la forma y bajo la regulación contenida en esta Ley, estableciendo en su artículo 10 que “ *Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales*, consagrando a continuación, en su artículo 11, los principios rectores aplicables en esta materia como son el de relevancia; de libertad de información; de apertura o transparencia; de máxima divulgación; de divisibilidad; el de facilitación; el de no discriminación; de oportunidad; el principio de control, de responsabilidad y de gratuidad; para regular finalmente a partir del artículo 12 y siguientes, la forma y procedimiento como las personas deben ejercer este derecho; las formalidades y plazos en que se debe cumplir con la entrega; las causales de reserva o secreto; los recursos ante el Consejo para la Transparencia y el reclamo de ilegalidad procedente ante las Cortes de Apelaciones.

**CUARTO:** Que, entrando en el conocimiento del asunto que se ventila ante esta Corte, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 28 de la señalada Ley N°20.285, en contra de las resoluciones que emita el Consejo para la Transparencia procederá el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante. Se trata, en consecuencia, de un reclamo de ilegalidad, de manera que su objeto no es enmendar o revisar el mérito de dichas resoluciones, sino solo verificar si ellas se ajustan a la normativa legal que regula las actuaciones de dicho Consejo.

No obstante, y conforme lo dispone expresamente el inciso segundo de dicha normativa: “*Los órganos de la Administración del Estado no tendrán derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información que hubieren denegado, cuando la denegación se hubiere fundado en la causal del número 1 del artículo 21*”, de manera tal que en estos casos es el propio legislador el que pondera como



bastante el control que lleva a cabo el CPLT, careciendo el órgano de la administración de legitimación para impetrar y esta Corte de competencia para conocer, un reclamo de ilegalidad en contra de la resolución del Consejo bajo estos supuestos.

**QUINTO:** Que, en el asunto que se examina, el reclamo deducido conforme a la normativa antes referida, se enmarca en el contexto de un requerimiento de información realizado por don Guillermo Mora Sanzana, solicitando la entrega de la rendición de cuentas del Proyecto N°2100042637, identificado como “ACTIVIDADES ALTO RENDIMIENTO: SKI, BALONMANO, PATÍN CARRERA, CICLISMO Y VOLEIBOL PLAYA”, correspondiente a los recursos entregados a la Corporación ADO Chile, por un monto total de \$107.740.685 y que el IND se negó a entregar por considerar, precisamente y al amparo de lo establecido en la causal del artículo 21, N°1, letra b) de la LT, que la entrega de la información solicitada, consistente en documentación presentada y pendiente de revisión, afecta el debido cumplimiento de las funciones del IND, ya que interfiere y reduce considerablemente el espacio de deliberación que tiene la Institución en relación al procedimiento administrativo de Rendición de Cuentas que se encuentra desarrollando, pudiendo quedar expuesta a recibir presiones o intervenciones de terceros ajenos al proceso, al momento de adoptar su decisión.

De esta forma, tal como lo alega el Consejo y ha sido sostenido reiteradamente por esta Corte, el IND carece de legitimación activa para recurrir de ilegalidad por esta causal de reserva en tanto dicha posibilidad se encuentra expresamente vedada por el inciso 2° del artículo 28 de la LT antes examinado, siendo éste, además, el único motivo de reserva esgrimido por el Instituto para sostener la denegación de entrega de la información requerida. Por lo expuesto, el recurso impetrado no puede prosperar en tanto esta Corte carece de competencia para revisar el asunto que se pretende someter a conocimiento cuando quien deduce el reclamo es un órgano de la administración, calidad que para estos efectos detenta el Instituto Nacional del Deporte.

Por estas consideraciones y con arreglo a lo que dispone el artículo 30 de la Ley N° 20.285, **SE RECHAZA, sin costas**, el reclamo deducido por el Instituto Nacional del Deporte en contra de la decisión recaída en el Amparos



Rol N° C 1840-24, de 24 de junio de 2024, adoptada por el Consejo para la Transparencia.

**Regístrese, comuníquese y archívese.**

**Redacción a cargo de la Abogada Integrante, Renée Rivero Hurtado.**

**N° Contencioso Administrativo 481-2024**

Pronunciada por la **Octava Sala** de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada, por la ministra señora Lilian Leyton Varela y la abogada integrante señora Renee Rivero Hurtado.



Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Alejandro Rivera M., Lilian A. Leyton V. y Abogado Integrante Renee Rivero H. Santiago, trece de mayo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a trece de mayo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MRYXXUUPFWM